

C.A. de Temuco

Temuco, diez de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en estos antecedentes se ha interpuesto recurso de apelación subsidiario, de aquel principal de nulidad también impetrado, por los letrados señores Marcelo Andrés Pizarro Quezada, Abogado Jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, Constanza Valentina Álamos Vásquez, Abogada de dicha unidad y Patricio Andrés Salinas Gaete, Abogado Defensor Local Jefe de Temuco, todos en calidad de defensores penales públicos, en representación del condenado **Manuel Martínez López**, respecto de la sentencia recaída en causa seguida bajo el RIT 222-2023, RUC N° 1901134991-1 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de esta ciudad, dictada con fecha 16 de enero del año en curso, en aquella parte de dicha resolución judicial que no habría concedido al sentenciado ya referido, la imputación al castigo principal de los abonos que se habrían originado por haberse encontrado sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y total, y por no emitir pronunciamiento respecto de la aplicación del artículo 38 de la Ley 18.216.

Fundan la procedencia de su ejercicio recursivo en la norma contenida en el artículo 37 del cuerpo legal ya referido con inmediata antelación, concretamente precisan que lo atacado es la sección del punto II de la parte resolutive que dispone que, respecto del abono de la medida cautelar de arresto domiciliario a la que estuvo sujeto el convicto, abonarla únicamente en caso de revocación de la pena sustitutiva concedida, señalando: ..."sí la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En estos casos, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WFSYXXXSPKB

tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y los días que permaneció sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario en esta causa..”.

SEGUNDO: Como bases de la impugnación promovida expresan que lo precedente debe ser sujeto a enmienda debido a que el artículo 348, inciso segundo, del Código Procesal Penal preceptúa que: "La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento". Sustentan que no considerar las cautelares que restringieron la libertad del encartado durante el proceso, importaría una limitación de aquella más allá de los casos previstos por la ley, infringiendo también lo previsto en el artículo 5 del Código Procesal Penal, especialmente en su inciso segundo al indicar que: "Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía".

Por lo precedente sostienen que, el lapso de arresto domiciliario en modalidad de total o parcial que estuvo vigente entre el 22 de diciembre de 2020 y el 11 de septiembre de 2023, debe ser abonado a la pena corporal de cinco años de presidio menor en su grado máximo impuesta a su representado, añadiendo que, el obrar jurisdiccional desplegado atentaría en contra de la jurisprudencia asentada por nuestro máximo tribunal en lo relativo a los abonos de privación de libertad heterogéneos, en que se ha indicado que su no consideración afecta los derechos del imputado, citan a ese fin el ROL N°251.187-2023 de fecha 27 de diciembre del año 2023 emanado de la Excma. Corte Suprema.



Es por ello que, apuntan, con mayor razón debe ser abonado a la pena corporal el tiempo en que el sentenciando ha visto limitada o restringida su libertad personal en la misma causa.

Piden, en consecuencia, que se enmiende la resolución recurrida, ordenando descontar a la pena temporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo impuesta al condenado, el tiempo a que estuvo sometido a la medida cautelar personal de arresto ya indicada y que corresponden a 984 días o aquel que el Juzgado de Garantía determine con mejores antecedentes; e igualmente, se ordene la omisión de la condena en los certificados de antecedentes penales de la anotación a que diere origen la sentencia de 16 de enero de 2024, aplicando a su respecto el artículo 38 de la ley 18.216.

TERCERO: Que, de manera preliminar, es necesario dejar establecido, que en la audiencia en que se produjo la vista de la causa, el Ministerio Público, dedujo incidente de inadmisibilidad de la apelación ya señalado, en lo concerniente a la impugnación de la omisión en la que habría incurrido el Tribunal al no pronunciarse en aquello relativo al artículo 38 de la Ley 18.216, en tanto, precisó que el régimen recursivo respecto de las resoluciones judicial dictadas por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal son restringidas y en el caso, sólo proceden, en tanto exista norma que conceda el recurso, en esa traza señaló que lo pretendido por la defensa no se encuadra en la norma contenida en el artículo 37 de la ley señalada que establece: “Artículo 37.- La decisión acerca de la concesión, denegación, revocación, sustitución, reemplazo, reducción, intensificación y término anticipado de las penas sustitutivas que establece esta ley y la referida a la interrupción de la pena privativa de libertad a que alude el artículo 33, será apelable para ante el tribunal de alzada respectivo, de acuerdo a las reglas generales”.



CUARTO: Que, teniendo este Tribunal, en consecuencia, en vista lo señalado en la norma transcrita con inmediata antelación, y emanando de su texto expreso que, lo requerido por la defensa, no se enmarca dentro de aquello que puede apelarse conforme a las normas generales, en particular con aquello regulado por los artículos 364 y 370 del Código Procesal Penal, es que se decidió declarar inadmisibile aquella petición de corrección contenida en la apelación.

QUINTO: Expuesto lo antecedente, es preciso indicar que, el centro de la discusión jurídica motivada por la apelación defensiva desplegada ha dicho relación sobre sí resulta jurídicamente procedente abonar a una pena sustitutiva- que no suprime la libertad- el tiempo de privación parcial o total de aquella a que estuvo sujeto el imputado como efecto de haberse decretado medidas de cautela personales en su contra durante el proceso.

SEXTO: Que, si bien es efectivo lo indicado por la defensa en orden a que, de una manera crecientemente uniforme nuestro máximo Tribunal de la República ha aceptado que, incluso pueda abonarse el tiempo que se ha encontrado privado de libertad un imputado-como medida de cautela- en una causa diversa de aquella en que se le sanciona, lo que se ha denominado como abono heterogéneo. Sin embargo, al respecto cabe precisar que, las hipótesis de procedencia en relación a lo previo se ha vinculado con procesos en los que aquellos han sido condenados a algún tipo de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, es decir, en ello ha imperado la sostenibilidad de que, el tiempo en que se ha encontrado el imputado bajo alguna medida cautelar personal que ha afectado su libertad ambulatoria deba, en términos muy sencillos, descontarse de aquel que debe cumplir luego como sanción producto de imponerse un castigo de la naturaleza ya señalada. Ello es coherente con lo expresado, en el ya citado inciso segundo del artículo 348 del Código Procesal Penal, que explícitamente mandata que el tribunal que dicta la sentencia debe establecer con



precisión la época de inicio del castigo debiendo, a ese fin, tener en vista los abonos que han de computarse en favor del sentenciado, indicándose que: "La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento. Para estos efectos, se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado".

SEPTIMO: Sin embargo lo previo, es necesario señalar que, el caso en estudio, se refiere a un escenario distinto, ya que si bien el condenado ha sido objeto de una sanción penal de presidio menor en su grado máximo, y que la misma es una que puede encuadrarse, formalmente, dentro lo que el artículo 26 del Código Penal denomina penas temporales (aun cuando dicha norma antecedente al cuerpo legal especial citado), entendiendo por tales "aquellas privativas o restrictivas de libertad cuya ejecución se extiende por un tiempo determinado entre sesenta y un días a cinco años, las menores; y de entre cinco años y un día a veinte años, la mayores.." ello en Texto y Comentario del Código Penal Chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2002, pág.284; lo cierto es que, dicha perspectiva, no considera que la sanción privativa de libertad le ha sido sustituida por concurrir a su respecto los requisitos previstos en la Ley 18.216, en particular las reglas de los artículo 14, 15 y 16 bis, de forma ella que el sentenciado no verá afectada, producto del cumplimiento de los requisitos contenidos en dichas normas, su libertad ambulatoria.

OCTAVO: Como resulta prístino, en estas circunstancias, aquella sanción que implicaba que el condenado hubiere ingresado a un centro de cumplimiento penitenciario para internarse por un tiempo de cinco año de privación de libertad, le ha sido reemplazo por el



cumplimiento de la sanción en libertad; ello desde la perspectiva penal tiene una eminente orientación asociada la finalidad de la pena en perspectiva de los postulados de la tesis relativas de aquella, y en particular, de la prevención especial positiva, desde que, efectivamente se busca la resocialización de aquel que ha transgredido la norma jurídica penal, lo que se satisface-en concreto- con un tratamiento en libertad, que en entre otras consecuencias positivas evita el contacto criminógeno(cuestión que parece, en la actualidad, de especial relevancia habida consideración del hacinamiento y la pocas posibilidad de segregación que se pueden llevar adelante en los establecimientos penales de nuestra República).

En la traza precedente, es posible traer a colación lo que señala el artículo 14 de la ley especial ya señalada que indica: “La libertad vigilada consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

La libertad vigilada intensiva consiste en la sujeción del condenado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales”.

De lo previo, cabe concluir que, como se insiste, no cabe sustentar en los hechos que se trate, la precedente, de una pena privativa de libertad, ni menos restrictiva de la misma (en los términos a que a ello se refiere nuestro código penal en sus artículos 33, 34, 35 y 36), ya que aquella ha sido reemplazado por un régimen de libertad a prueba que se debe ver reflejado en el cumplimiento de un programa de actividades especialmente diseñado para la reinserción social del sancionado, por lo que resulta natural que el plazo de intervención es



un eje central en miras a obtener la finalidad perseguida, cual es la reinserción social, de manera ella que, con esto aparece que la disminución del mismo, sin siquiera haber dado comienzo a la ejecución de dicha sanción sustitutiva no se aprecia compatible con el fin trascendente, ya señalado, que se encuentra en la base del reemplazo del castigo apuntado. Ello sin perjuicio de que, producto del cumplimiento del plan de intervención que se diseñe para el castigado, este pueda disminuir el tiempo a que se encuentre sujeto a aquello, cuestión que la propia ley aludida prevé al establecer que en el inciso final del artículo 16 lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, el delegado podrá proponer al juez la reducción del plazo de intervención, o bien, el término anticipado de la pena, en los casos que considere que el condenado ha dado cumplimiento a los objetivos del plan de intervención”. Vale decir, es factible –incluso- que se pueda dar por cumplida la sanción anticipadamente de mediar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de intervención individual del penado.

Añadidamente, es preciso considerar que el propio artículo 32 de la Ley 18.216, permite reemplazar gradualmente la pena sustitutiva impuesta, al señalar: “Artículo 32.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley, una vez cumplida la mitad del período de observación de la pena sustitutiva respectiva, y previo informe favorable de Gendarmería de Chile, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá reemplazar la pena conforme a lo siguiente:

a) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada intensiva, podrá sustituirla por la libertad vigilada.

b) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada, podrá sustituirla por la remisión condicional.



Cuando a un penado se le hubiere sustituido la libertad vigilada intensiva por la libertad vigilada, sólo podrá reemplazarse esta última por la remisión condicional si se contare con informe favorable de Gendarmería de Chile y el condenado hubiere cumplido más de dos tercios de la pena originalmente impuesta”.

NOVENO: Que, en consecuencia, se estima que abonar-en el caso concreto- el tiempo de privación de libertad a que estuvo sujeto el condenado, a una sanción que ha de cumplirse en libertad desvirtúa los fines de resocialización que aquella persigue, y por lo tanto, aquello que resulta aconsejable en los términos que emanan para escenarios distintos al presente de la propia jurisprudencia citada por la defensa, no resulta aplicable en la circunstancia específica por las razones que se han patentado, y que concretamente se vincula con que la pena sustitutiva mencionada no puede concebirse comprendida dentro del concepto de pena temporal en los términos ya revisados.

De esta manera, cobra mayor sentido, lo que se ha sostenido en las sentencias que fueron citada por la parte querellante, roles de la emanados de la Excma. Corte Suprema 72.032 y 95.109 ambas del año 2020 y que, se vinculan a casos en que se ha impuesta una pena sustitutiva, como aquella a la que se ha hecho alusión, disponiéndose que, en el caso que aquella le sea revocada, y por lo tanto deba cumplir el condenado en encierro, se le debe abonar aquel tiempo que estuvo bajo una medida de cautela personal que restringió o suprimió su libertad ambulatoria.

DECIMO: Corolario necesario de lo antecedente es que, el recurso de enmienda promovido por la defensa letrada del convicto ha de ser desestimado.

Y visto lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal, 348 del Código Procesal Penal y artículos 14, 15, 15 bis, 32 y 37 de la Ley 18.216 se declara que:



Se **CONFIRMA** lo resuelto en la sentencia de dictada con fecha 16 de enero del año 2024 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad en el RIT 222-2023, RUC N° 1901134991-1, en la sección del punto II de su parte resolutive que indica, en lo pertinente, que: “sí la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En estos casos, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y los días que permaneció sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario en esta causa”.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Juan Bladimiro Santana Soto

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Penal N° 801-2024. (sac)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WFSYXXXSPKB

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Carlos Ivan Gutierrez Z., Ministra Suplente Luz Monica Arancibia M. y Fiscal Judicial Juan Bladimiro Santana S., se previene que el Sr. Santana no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no encontrarse integrando el día de hoy. Temuco, diez de junio de dos mil veinticuatro.

En Temuco, a diez de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WFSYXXSPKB